

nencias, de adhesiones, de fidelidades que lo hacen distinto y disidente de aquellos que cree sus iguales. Los otros son portadores de atributos y de rasgos que me desmienten, y mis cualidades, que no casan bien y de una vez para siempre, me cambian y los desmienten a ellos. Habrá que idear marcos de convivencia en los que dar cabida a las diferencias individuales que son resultado de diferencias culturales plurales sin exigir de cada uno que sea idéntico a sí mismo con una sola definición. La clave no es la comodidad indiscutida conmigo mismo o con aquellos que llamo mis iguales, la de quien permanece ciego a lo que le es vecino y le desmiente, sino la incomodidad universal, el reconocimiento de la inquietante extranjería que me habita, la globalización efectiva que me atraviesa y sobre la que yo mismo emprendo averiguaciones. Por eso, el resultado es, para nuestro antropólogo, la comprensión de la cultura como un repertorio de interpretaciones; y al decirlo así, señala lo importante, lo decisivo, aquello que forma parte de nuestro debate contemporáneo, de ese mundo hecho pedazos, fragmentos, discursos, elaboraciones que fluctúan y que se contaminan. ¿Cómo no ser liberal después de esa conclusión? ¿Cómo no profesar los principios de la tolerancia liberal, esos principios que –a juicio de Geertz– «son todavía nuestra mejor guía»? Hay que seguir defendiendo «su resuelto individualismo, su énfasis en la libertad, en el procedimiento, en la universalidad de los derechos humanos y (...) su preocupación por la distribución equitativa de las posibilidades de vida». Pero no se engaña. Hay mucho que transitar aún, pues es preciso, apostilla Geertz, «el desarrollo de un liberalismo con el coraje y la capacidad de comprometerse con un mundo diferenciado, uno en el que sus principios ni están bien comprendidos ni son ampliamente mantenidos».

Justo Serna es profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

La guerra como discurso político del imperio

Consuelo Ramón Chornet

¿Quién se habría atrevido a pronosticar, tras el optimismo que causó la caída del muro, que el siglo XXI nacería también gracias a la vieja partera, la guerra, y todavía peor, no por uno de esos conflictos postnacionales, simbólicos, como los anunciados por Huntington o los Toffler, sino según el más clásico estilo? Un año después, hemos comprobado cómo la caja de Pandora abierta por los atentados del 11-S dejaba atrás la esperanza de un mundo sin bloques, sin conflictos, y daba a luz al viejo jinete. Bajo el «nuevo» rostro del mundo globalizado se esconde en realidad una máscara vieja, la de la guerra, y aún más, la amenaza de que la lógica de la guerra se haga con el monopolio del verdadero discurso político, superando la sentencia de Clausewitz. La guerra, su lógica, usurparía así el lugar del discurso político.

En efecto, si podemos hablar de ese riesgo invasor, imperial, de la guerra en la política, es, en primer lugar, porque la estrategia desplegada por la Administración Bush desde el 12-S supone la imposición de la dialéctica maniquea amigo/enemigo como único discurso de la política (el que predica Bush, seguidor *malgré soi* de Schmitt), que contamina principios elementales de legitimidad democrática en el orden interno y en el internacional tal y como trataré de ejemplificar enseguida. En el primero, por su efecto de criminalización de la disidencia, de la libertad de expresión y crítica. En el segundo,



Ignacio Ramonet
Guerras del siglo XXI.
Nuevos miedos, nuevas amenazas
Mondadori, Barcelona, 2002,
190 págs.

por la reducción de las relaciones internacionales a la lógica del vasallaje, en la que no existe más que la hiperpotencia representante del universalismo y, frente a ella, el enemigo.

Además, porque esa usurpación produce un efecto elusivo, de enmascaramiento, de maniobra de distracción respecto a los verdaderos asuntos políticos, tal y como ha denunciado entre otros Remiro Brotons: de forma muy concreta, mientras lo que monopoliza la política en el centro del mundo político que es el imperio sea la guerra, en Afganistán o Irak, queda lejos la discusión sobre las cuestiones de la otra agenda política, la económica, la medioambiental, la social, donde quiebra la administración Bush, que ha incrementado el déficit público y bloquea una parte de la globalización de la justicia y de los bienes comunes (Kyoto, Johannesburgo, Monterrey, TPI). Esas prioridades bélicas arrinconan a un lugar secundario también los escándalos financieros que afectan a una parte importante del círculo más estrecho de la Casa Blanca y de sus apoyos electorales.

Y aún existe otro argumento que justifica la tesis propuesta y éste, a mi juicio, decisivo: ese modo de entender la política supone *de facto* la extensión de la lógica del derecho a matar, que proyecta sobre el orden internacional dicho atributo básico del poder político en el orden interno, en el que ocupa un lugar central precisamente en la medida en que la única justificación de ese poder es evitar la guerra de todos contra todos en la que vence el más fuerte y los demás no tienen garantizado el derecho a la vida (Hobbes *dixit*). En efecto, es esa la lógica que subyace a la pretensión de legítima defensa y de guerra justa con la que se presentó en su momento la operación *Libertad duradera* que continúa abierta (como también, aunque lo hayamos olvidado, continúa la campaña bélica de los EE UU en Afganistán, convertida en ocupación militar sobre la que se sostiene —más que sobre el cumplimiento de los acuerdos de Bonn auspiciados por la ONU— el

pseudogobierno de Karzai) y, sobre todo, su aplicación extensiva a la crisis internacional que vivimos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra los EE UU. Esa extensión se apoya a su vez en dos argumentos simplistas que constituyen los dogmas de la política exterior del Gobierno Bush. Uno, que la situación de emergencia que vivimos exige una *unidad sin fisuras* contra el terrorismo internacional, porque éste es una amenaza contra toda la humanidad, contra la civilización misma. Por esa razón, vacilar en el apoyo a esa guerra es repetir el error que las democracias europeas cometieron con Hitler. El otro, que frente a ese terrorismo es legítimo el recurso a la fuerza, incluso como guerra, lo que significa, en primer lugar, que frente a los atentados del 11 de septiembre procede la legítima defensa. Y significa, además, que la respuesta al terrorismo alcanza el rango de una guerra, y no cualquiera, sino una auténtica guerra mundial, que es una *guerra justa* en cuanto *guerra contra el mal*. Por eso, el peor efecto del 11-S es hacer real el diagnóstico de Chomsky cuando escribe que la guerra ha sido convertida por los últimos gobiernos de los EE UU en la expresión más coherente de su política internacional.

Es necesario mostrar los riesgos de esta tesis y ofrecer alternativas. Lo primero que ofrece Ramonet en su ensayo son los argumentos que muestran, de un lado, la funcionalidad de las guerras, de las nuevas guerras, ejemplificadas sobre todo en la guerra global contra el terrorismo, a la estrategia global conducida por la potencia hegemónica, y de otro, la aparición de otra nueva guerra, consecuencia de lo que Bauman (parafraseando a Weber) ha llamado la segunda gran escisión, el proceso de exoneración de cualquier regla o instrumento de control que persigue el proyecto globalizador propio del neoliberalismo que lo guía, un neoliberalismo fundamentalista (Stiglitz) o totalitario incluso (Beck), aunque a los buenos seguidores de Mill la expresión les parezca un oximoron. Un proceso que cuenta con la afinidad de la concep-

ción estratégica propia de la Administración Bush, como se ha puesto de manifiesto en la posición de su Gobierno durante las conferencias mundiales de Monterrey y Johannesburgo.

Pero, como digo, en su objetivo de mostrar las nuevas amenazas, los nuevos miedos, Ramonet va más allá de la noción académica de las «nuevas guerras», que pusieron de moda los trabajos de Kaldor o los de los Toffler, a los que siguieron los de Ackhar, Aguirre, Boniface, Engelhard, Heisburg, Castells, Enzensberger, Bauman, Beck, Glucksmann o Henri-Lévy. En efecto, más allá de las guerras de Kosovo, de esa «nueva guerra de los 100 años» –como la llama Ramonet– que es el conflicto de Israel en Palestina, y de la campaña bélica de los EE UU en Afganistán, tres de los conflictos emblemáticos analizados por el autor, lo cierto que esos conflictos confluyen a su vez en una nueva guerra, la *guerra global* contra el terrorismo, que simboliza los elementos más relevantes de ese concepto de nuevas guerras, tal y como lo ilustra el manifiesto *Carta de América*, en el que 60 intelectuales norteamericanos redescubrían el concepto de *guerra justa* a propósito de la necesaria reacción frente a los acontecimientos del 11-S. Una nueva guerra, como guerra contra los Estados y contra los grupos organizados que violan los derechos humanos y en particular aquellos identificados como amenazas contra la paz y la seguridad en cuanto agentes del terrorismo internacional, significativamente vinculados unos y otros al «fundamentalismo islámico».

Pues bien, dejemos de lado la denuncia ejemplificada en el chiste: los servicios secretos comunican a Bush que han acreditado la existencia de armamento atómico y no convencional y la disponibilidad y voluntad de utilizar esas armas contra terceros. Bush, satisfecho, decide: ya podemos invadir Irak. Pero ellos replican: «No, hablábamos de Israel». Dejemos de lado también la lista de incumplimientos de la Carta de la ONU, de resoluciones del Consejo de Seguridad y del tribunal de La Haya de las que es responsable... la administración nortea-

mericana. Esta nueva guerra es, como decía más arriba, una herramienta en la política imperial. La paradoja consiste en que una administración anclada en la más clásica concepción autista de la política, el Gobierno Bush, utiliza la estrategia nacida el 12-S para arrogarse el destino manifiesto de campeón del cosmopolitismo, de los valores universales de la civilización, de la democracia. En suma, su condición imperial. Un imperio que, en su decidida voluntad de soberanía absoluta, anuncia abiertamente su proyecto de hegemonía, en aras del cual evitará la aparición de cualquier fuerza que pueda competir con él. Un orden imperial que no puede aceptar los principios del Estado de derecho en el ámbito interno ni la extensión de las reglas de juego de la democracia en el ámbito internacional. Un orden imperial que practica el doble rasero en función de sus propios intereses, y al que no le importa que sus mercenarios –Sharon, Putin, Musharraf– carezcan de los requisitos democráticos a los que condiciona supuestamente la ayuda al desarrollo para el resto de los países que no pueden desempeñar tales funciones. Un orden imperial que, cual Frankenstein, abomina de las criaturas que creó en cuanto éstas pretenden autonomía.

Volvamos a la lucha contra el terrorismo convertida en prioridad de la agenda política mundial que conduce el imperio. Y volvamos para recordar algo elemental, como analiza Ramonet, en coincidencia con Chomsky, con Frank, con Ferrajoli, con la mayor parte de los especialistas en Derecho internacional: la lucha contra el terrorismo internacional no es un cheque en blanco para el recurso a la fuerza y no debe justificar, ni siquiera con el argumento de mal menor, de *efectos colaterales*, consecuencias letales para la democracia en el orden interno y en el internacional. Consecuencias como la criminalización de la disidencia, la reducción de los principios y reglas de juego del Estado de Derecho, la suspensión de garantías básicas de los derechos fundamentales como el *habeas corpus*. Y ya apunté algo sobre los efectos en las re-

laciones internacionales, devastadores por lo que se refiere a la garantía de la paz y la seguridad y para el respeto a la autonomía de decisión de los agentes de las relaciones internacionales que no sean los EE UU, a quienes no les queda otra opción que el dilema cornudo de alinearse tras el imperio del bien, como súbditos, no como aliados (pues no se les trata como iguales, no se les consulta, sino que se les exige adhesión, como la que prestan Blair, Aznar y Berlusconi) o tras las fuerzas del mal. Las repercusiones sobre la UE o sobre la misma OTAN, reducidas a una función de comparsa y ahora requeridas para escoltar la nueva estrategia de *intervención preventiva*, son elocuentes.

Con todo, lo más interesante de este ensayo del director de *Le Monde Diplomatique*, a mi juicio, es la tesis de la existencia de otra *guerra global*, a la que dedica buena parte del libro. Como ha escrito De Lucas, Ramonet muestra en esas páginas cómo ese nuevo orden imperial que recurre de nuevo a la guerra, es vicario de la globalización neoliberal, la nueva empresa de conquista cuyo objetivo es el mercado, no la tierra, y cuyos agentes no son los ejércitos sino las transnacionales y los medios de comunicación. Un «orden» que nace de la ideología que conduce ese proceso de globalización, el globalismo, denunciada por Stiglitz como auténtico fundamentalismo de mercado («liberalismo totalitario» lo califica Beck en su último libro de conversaciones con J. Willis), y que se traduce en el desorden de la globalización que vivimos: porque desorden es la globalización de la miseria, el condicionamiento mercantilista del acceso a derechos humanos elementales como la alimentación, la salud o la educación, tal y como nos lo revela el escándalo de resistencia de las multinacionales farmacéuticas, en el contexto de pandemia que supone el SIDA en el continente africano, un factor estructural al que el libro quizá no presta suficiente atención. Un desorden al que Ramonet ha dedicado otros lúcidos trabajos, por ejemplo, en el ámbito específico de la comunicación global. Un desorden que se

muestra a las claras, por ejemplo, en la ausencia de voluntad política de contribuir al objetivo de desarrollo. Basta leer los informes sobre la disminución de la ayuda al desarrollo, como el informe *Global Development Finance 2002* del Banco Mundial que demuestra que esa ayuda ha caído un 20% entre 1990 y 2001, año en el que quedó por debajo de 40.000 millones de dólares. El objetivo del 0,7 % del PIB destinado a ayuda al desarrollo y asumido como compromiso por la ONU lejanamente, en 1969, sólo ha sido alcanzado por cinco países (Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda y Luxemburgo; los EE UU apenas rozan el 0,15% y la UE está en el 0,33%, con aspiraciones de alcanzar el 0,39%). El mismo informe muestra que los objetivos trazados por la ONU en su programa *Objetivos de Desarrollo del Milenio*, en la Conferencia para la Financiación del Desarrollo convocada con motivo de la Cumbre del Milenio del 2000 (reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dólar al día en el período 2000-2015), requerirían como mínimo duplicar los 40.000 millones de dólares en los que se cifra esta ayuda en el 2001.

Las contradicciones de este proyecto globalizador se pusieron de manifiesto, por ejemplo, en la Conferencia de Monterrey, celebrada en junio de este año 2002. El resultado de la Conferencia, el denominado «consenso de Monterrey» evidentemente está más cerca del *new deal* propuesto por Bush que del modelo de ayuda al desarrollo requerido por los países del tercer mundo. Algunos han llegado a hablar de «neocolonialismo humanitario», para describir ese modelo que pretende establecer nuevas reglas de juego. La clave es el principio enunciado por los representantes de EE UU de que «cada país es responsable de su propio desarrollo» y por eso el énfasis se pone sobre todo en que el desarrollo que pretenden los países receptores de la ayuda, es sobre todo el resultado de una lucha eficaz contra la corrupción, y de la adopción de medidas que aseguren la gestión eficaz de los recursos públicos, el fomento de la ini-

ciativa privada, la búsqueda de la sostenibilidad fiscal, la eliminación de barreras comerciales y la adopción de leyes que fomenten la inversión. Por supuesto que no falta la apelación a la colaboración de los países ricos, la mayor cooperación financiera y técnica y la apertura comercial y la promoción de un financiamiento sostenible de la deuda externa, pero la ausencia de compromisos concretos para conseguir recursos, de ningún nuevo instrumento de desarrollo, y la manifiesta insuficiencia de los acordados que son reiteración de compromisos anteriores a su vez incumplidos ponen en entredicho todo lo anterior. Ninguna iniciativa tampoco sobre viejos problemas: reducción de la deuda externa, control eficaz de los movimientos especulativos de capital, barreras arancelarias, inestabilidad de las inversiones en los países pobres, sustitución del sistema de créditos por los fondos estructurales y ayudas a fondo perdido, reforma de las organizaciones económicas internacionales.

Lo más importante es la adopción, en buena medida, de la propuesta formulada por la Administración norteamericana, que condiciona la ayuda a los resultados («no debemos firmar cheques sin resultados» afirmó Bush en su discurso ante la Conferencia) y que, por decirlo de forma más clara, supedita la apuesta por el desarrollo a la lógica de la búsqueda del beneficio por parte de los países donantes de ayuda. Los programas de ayuda, de acuerdo con el modelo propuesto por Bush, no serán puestos en práctica por los Estados, sino por las sociedades y organizaciones contratadas por los países donantes. El modelo expuesto por Bush condiciona la ayuda a una serie de compromisos concretados en reformas económicas, políticas y legales: la lucha contra el terrorismo (en los términos definidos por la propia Administración Bush), el respeto a las reglas del libre comercio y el freno eficaz a la corrupción, junto a medidas democratizadoras internas (el respeto a los derechos humanos en primer lugar) de conformidad con el dogma en que se basa su

concepción del problema: flexibilizar el comercio y promover las inversiones es la vía más adecuada para el desarrollo, y no la de la ayuda, máxime si ésta se entiende en los términos «irresponsables» de donación solidaria sin contraprestación. Para resumir: se ayudará a quienes liberalicen su economía y se muestren leales seguidores de la lucha antiterrorista definida por los EE UU. Sin desconocer los elementos positivos que concurren en esa propuesta, que, además del apoyo a los procesos democráticos y al respeto de los derechos humanos, se cifran sobre todo en la apuesta por el control de los mecanismos de ayuda y cooperación al desarrollo, el problema es la indefinición de los criterios de juicio del cumplimiento de las cláusulas de condicionamiento de la ayuda y su supeditación a la óptica del donante y sobre todo de quien ha definido la estrategia, la administración Bush, en particular a la luz de la muy negativa repercusión de su particular cruzada contra el terrorismo en las relaciones internacionales a lo largo del último año.

Frente al avance de ese proyecto, Ramonet ofrece propuestas para construir otro bien distinto, otro mundo, otra política que, evocando a Hugo, son también posibles: el que representa el movimiento de la resistencia o revuelta frente a la globalización, de Seattle a Porto Alegre, un proceso en el que la contribución de Ramonet ha ido más allá del análisis teórico, pues ha sido decisiva tanto en la aparición de ATTAC como en la organización misma de ese «foro de la humanidad» que, en opinión del propio Ramonet, es Porto Alegre. Pero es seguro que podremos leer pronto otros trabajos en los que desarrolle las experiencias de este foro.